



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
POLICÍA NACIONAL  
METROPOLITANA SOACHA  
COMANDO OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA

SUBCO-COSEC - 13.0

Soacha, 04 de julio de 2026

Señor (a)  
Usuario Anónimo  
Soacha-Cundinamarca

Asunto: respuesta solicitudes Nro 922969-20260617, 922970-20260617, 922971-20260617, 922972-20260617, 922973-20260617, 922974-20260617, 922977-20260617 y 922978-20260617.

En atención a la solicitud presentada por usted en el Sistema de información de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias SIPQRS, la cual fue remitida por competencia a la Policía Metropolitana de Soacha, donde manifiesta; *“(…) NO ME PARECE QUE ÉL TENGA ESTAS POLÍTICAS DE TRABAJO YA QUE AFECTA TANTO A LOS POLICÍAS COMO A LA COMUNIDAD DE IGUAL MANERA TAMBIÉN MANIFIESTAN LAS FORMACIONES CON FRASES COMO USTEDES VERÁN SI TRABAJAN Y HACEN ESTOS COMPARENDOS O ESTAS CAPTURAS SI QUIEREN QUE NOS MATEMOS ENTRE NOSOTROS PARA ASÍ PODER DESCANSAR SON LAS FRASES QUE UTILIZAN LAS FORMACIONES (…)”*, de manera atenta y respetuosa emito respuesta a su requerimiento bajo los siguientes criterios institucionales:

La Policía Nacional de Colombia, como parte integrante de las autoridades de la República y como cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, está instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Asimismo, para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz, (Art. 218 Constitución Política de Colombia y Art. 1° Ley 62 de 1993).

De igual manera, es importante darle a conocer que el servicio público de Policía se presta con fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, control ciudadano y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Por tanto, el interés por mantener la armonía social, la convivencia ciudadana, el respeto recíproco entre las personas y de éstas hacia el Estado, lo cual genera una actividad Policial un carácter eminentemente comunitario, preventivo, educativo, ecológico, solidario y de apoyo judicial. (Art. 2° Ley 62 de 1993).

En atención a su solicitud, me permito informar que el Comando Operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de Soacha dispuso el inicio de las actuaciones administrativas y diligencias de verificación correspondientes, con el propósito de esclarecer los presuntos hechos relacionados con posibles situaciones de acoso laboral que, según lo manifestado, se estarían presentando con el personal de vigilancia adscrito a la Estación de Policía León XIII. En tal sentido, se informa que se llevó a cabo intervención institucional por parte del grupo interdisciplinario de la Policía Metropolitana de Soacha (MESOA), orientada a verificar las circunstancias expuestas en su requerimiento, efectuando las actividades pertinentes encaminadas a identificar y establecer la ocurrencia de los hechos puestos en conocimiento de esta unidad, donde no se evidenció situaciones relacionadas con la suspensión de las franquicias o exigencias de cuotas para obtener beneficio alguno.

El objetivo de dichas actuaciones consiste en constatar la veracidad de los señalamientos relacionados con posibles irregularidades en el ejercicio de las funciones por parte del personal uniformado que ejerce labores de liderazgo y dirección al interior de la referida unidad policial.

Lo anterior se adelanta en observancia de los principios de transparencia, legalidad e integridad institucional, promoviendo, en caso de encontrarse mérito suficiente, la adopción de las acciones administrativas y/o disciplinarias a que haya lugar, en estricto cumplimiento de la normatividad legal y reglamentaria vigente.

No obstante, las actuaciones que se puedan adelantar en materia disciplinaria, deberán contar con argumentos jurídicos y elementos materiales de prueba, que soporten la vulneración a las normas que regulan el proceder de los funcionarios de policía, principalmente como garantía al debido proceso y según los principios básicos de la actuación judicial, los cuales buscan la corrección y prevención de conductas que se encuentren vulnerando derechos fundamentales, preceptos que podemos apreciar a través de los artículos 3, 17, 22, 24 y subsiguientes de la ley 2196 del 2002 “Por la Cual se Expide el Estatuto Disciplinario Policial”, los cuales a la letra dicen:

**“(…) Artículo 3. Finalidad en materia disciplinaria.** Esta disposición, regula el comportamiento del personal uniformado de la Policía Nacional y se aplicará cuando se transgreda el presente estatuto disciplinario o se vulnere la protección de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política e instrumentos internacionales de Derechos Humanos, suscritos y ratificados por Colombia, que hacen parte del bloque de constitucionalidad y, dan lugar a la activación de la acción disciplinaria contenida en esta ley.

**Artículo 17. Motivación.** Los autos interlocutorios y los fallos proferidos dentro del proceso disciplinario deberán estar debidamente motivados.

**Artículo 22. Fines del proceso disciplinario.** Las finalidades del proceso son el cumplimiento de los fines del Estado la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustancial, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas que en él intervienen.

**Artículo 24. Finalidad de la sanción disciplinaria.** La sanción disciplinaria cumple esencialmente los fines de prevención y corrección para propender por la efectividad de los principios consagrados en los tratados internacionales de Derechos Humanos, La Constitución Política, la Ley y los reglamentos que se deben observar en el ejercicio de la función pública a cargo de la Policía Nacional (...).”

De igual manera, la identificación de la persona que pone en conocimiento hechos que pueden vulnerar las normas disciplinarias, es fundamental para poder iniciar un proceso disciplinario, según lo descrito en el artículo 86 de la ley 1952 de 2019 “*Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario*”, el cual nos ilustra lo siguiente;

**“(…) ARTÍCULO 86. Oficiosidad y preferencia.** La acción disciplinaria se iniciará y adelantará de oficio, o por información proveniente de servidor público o de otro medio que amerite credibilidad, o por queja formulada por cualquier persona, **y no procederá por anónimos**, salvo en los eventos en que cumpla con los requisitos mínimos consagrados en los artículos 38 de la Ley 190 de 1995 y 27 de la Ley 24 de 1992 (...).” (negrilla y subrayado fuera del texto).

Luego de indicado lo anterior, me permito informarle que no es posible atender favorablemente su requerimiento en mérito de lo descrito en la Ley 1755 de 2015, la cual expresa:

“(…) Artículo 16. Contenido de las peticiones. Toda petición deberá contener, por lo menos:

1. La designación de la autoridad a la que se dirige.
2. **Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y o apoderado, si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá correspondencia.** (…)
3. **El objeto de la petición.**
4. **Las razones en las que fundamenta su petición.**
5. **La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite.**
6. **La firma del peticionario cuando fuere el caso.** (Negrilla y subrayado fuera de texto)

Así mismo, sobre dicho particular la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-951/14, realizó el siguiente pronunciamiento:

“(…) **DERECHO DE PETICION-Núcleo esencial**

El núcleo esencial de un derecho representa aquellos elementos intangibles que lo identifican y diferencian frente a otro derecho, los cuales no pueden ser intervenidos sin que se afecte la garantía. En el derecho de petición, la Corte ha indicado que su núcleo esencial se circunscribe a: i) la formulación de la petición; ii) la pronta resolución, iii) respuesta de fondo y iv) la notificación al peticionario de la decisión.

7. La Sala Plena decidió declarar la exequibilidad condicionada del artículo 16 del Proyecto de Ley Estatutaria, “siempre y cuando el numeral 2º se entienda sin perjuicio de que las peticiones de carácter anónimo deban ser admitidas para el trámite y resolución de fondo cuando exista justificación seria y creíble del peticionario para mantener la reserva de su identidad.

8. Al analizar la posibilidad de habilitar la presentación de peticiones anónimas, la Corte presentó tres argumentos sólidos para desestimar esa opción. En primer lugar, indicó que **la exigencia en la identificación del peticionario se justifica desde el punto de vista de la efectividad del derecho, en especial cuando se trata de peticiones de interés particular.** En segundo lugar, explicó que hace parte del núcleo esencial del derecho de petición, la obtención de una respuesta pronta, lo cual se vería desdibujado con las peticiones anónimas, ya que el funcionario encontraría dificultades para ofrecer y direccionar su respuesta. Por último, la Corte resaltó que la identificación del peticionario imprime seriedad al ejercicio del derecho de petición y obliga a quien lo suscribe a hacerse responsable por sus afirmaciones.

A pesar de estas sólidas razones, la Sala prosiguió su estudio indicando que ante la eventualidad de que un ciudadano describa circunstancias **“serias y creíbles que justifiquen [su] anonimato... y ameriten la intervención de la autoridad competente”**, el derecho de petición debía ser admitido. Por lo tanto, estimó necesario efectuar el referido condicionamiento al numeral 2º del artículo 16, pues lo contrario, constituiría un obstáculo para el ejercicio efectivo del derecho.

En efecto, estimo que el condicionamiento no era necesario, ya que no en todos los escritos presentados ante una autoridad se ejerce el derecho de petición. En otras palabras, quien vea la necesidad de ocultar su identidad, puede presentar denuncias, quejas, panfletos u otra clase de escritos anónimos ante una autoridad, quien está obligada a activar su competencia cuando se describan circunstancias que así lo ameriten, con cierto grado de credibilidad. Por tanto esa posibilidad de control está asegurada para el ciudadano, pero no a través del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 23 Superior.

**Reitero que no es de la esencia de un derecho de petición el anonimato, ya que ello desdibuja la posibilidad de concretar y ofrecer una respuesta de fondo, clara y oportuna a quien ejerce el**

**referido derecho, premisa que fue expuesta en esta sentencia.** (...)” (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Así mismo, sería procedente señalar que de acuerdo a lo descrito en la norma ibídem en su artículo 17 señala:

(...) **“Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito.** En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes.”

Es de anotar que, la Policía Nacional ha centrado todos sus esfuerzos y ha desplegado toda su capacidad institucional, para el cumplimiento de las disposiciones constitucionales que conllevan a preservar las condiciones óptimas para el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas, así mismo nuestra institución, ha establecido políticas institucionales enfocadas en resaltar los valores y principios de cada funcionario, instruyendo de manera directa a nuestro personal, en las doctrinas de transparencia policial y lucha contra la corrupción, con el fin de consolidar una institución que se caracterice por el decoro en el servicio y la efectividad en el trabajo mancomunado con los residentes de nuestra jurisdicción.

De lo anterior, a través del presente documento se brinda respuesta bajo los presupuestos establecidos en la Ley 1755 de 2015, de forma completa, de fondo, clara, congruente y definitivo con el reclamo por usted formulado, siendo menester precisar que este Comando Operativo siempre estará atento para atender sus requerimientos y peticiones.

Atentamente,

...



Firmado digitalmente por:  
Nombre: Oscar Fabian Gutierrez Salamanca  
Grado: Teniente Coronel  
Cargo: Comandante Operativo De Seguridad Ciudadana  
Cédula: 13270452  
Dependencia: Comando Operativo De Seguridad Ciudadana  
Unidad: Metropolitana Soacha  
Correo: oscar.gutierrez@correo.policia.gov.co  
6/07/2026 3:55:30 p. m.

Carrera 4 # 38-160  
Teléfono: 3233984131  
mesoa.cosec@policia.gov.co  
www.policia.gov.co

**INFORMACIÓN PÚBLICA**



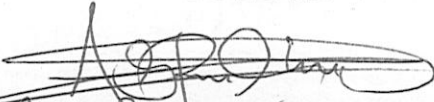
**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
POLICÍA METROPOLITANA DE SOACHA.**

Soacha, 06 de julio de 2026

**CONSTANCIA**

En la fecha el suscrito Subintendente ALEXIS ROLANDO MONROY ORTEGA, deja constancia, que en atención a los números de solicitudes de tickets 922969-20260617, 922970-20260617, 922971-20260617, 922972-20260617, 922973-20260617, 922974-20260617, 922976-20260617, 922978-20260617 y 922979-20260617 radicada a través del sistema de Información de peticiones, quejas, reclamos reconocimientos del servicio policial y sugerencias, no posee datos de notificación como: dirección teléfono o correo electrónico. En virtud de lo anterior se publica la respuesta a través de la página web de la Policía Metropolitana de Soacha.

**CONSTE**

  
SI ALEXIS ROLANDO MONROY ORTEGA

**Grado-post-firma y firma**

Funcionario Comando Operativo de Seguridad Ciudadana MESOA

